

0045/2024

El proyecto de real decreto da cumplimiento al mandato recogido en la disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, por la que se mandata al gobierno a regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables. Los requisitos del etiquetado accesible se regulan *ex novo*, y, en consecuencia, no suponen la derogación de ninguna norma.

El texto que se informa consta de una exposición de motivos y cuenta con un total de 6 artículos, una disposición adicional única, una disposición transitoria única y cuatro disposiciones finales.

El artículo 1 aborda el objeto y ámbito de aplicación de la norma; el artículo 2 define el concepto de etiquetado accesible; el artículo 3 establece las obligaciones de accesibilidad en los productos de consumo de especial relevancia, obligando -además- a que la información de carácter más básico, aparezca en formato braille; el artículo 4 aborda el fomento del etiquetado accesible, indicando la actividad de fomento que deberá desarrollarse por parte de las Administraciones Públicas dirigido a extender su uso; el artículo 5 se refiere al asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible, señalando la colaboración en la materia por parte de las empresas y operadores del mercado; y el artículo 6 aborda el régimen sancionador, que reconduce a la aplicación de las normas con rango de ley a las que se refiere.

I

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos -**RGPD**-), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -**LOPDGDD**- conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los

que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamientos de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo **4.1** del **RGPD**, define los datos personales como “: *toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona*”.

A su vez, de acuerdo con el contenido de la “Definición” del **punto 2** del propio **artículo 4** del **RGPD**, para que exista tratamiento de datos de carácter personal, se requiere la realización de “*cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción*”. Por su parte, la definición de “fichero” se contiene en el apartado 6 del artículo 4, que refiere a “*todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica*”.

Por su parte, los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. -*Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94-*, establecen que:

“1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

Pues bien, según se colige del contenido del proyecto, la información que se integraría en el nuevo sistema de etiquetado -al objeto de garantizar la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para personas consumidoras vulnerables-, **no incorporaría datos de personas físicas** identificadas y/o identificables en el sentido legal del término.

Esto es, del contenido normativo del **texto que se informa y de su MAIN**, **se deduce** que, de acuerdo con su propia naturaleza, los datos tratados en las tareas de etiquetado cuya regulación se establece, **no van a referirse a información personal** que identifiquen de ningún modo a los posibles afectados, por lo que en este caso **no pueden entenderse aplicables al supuesto**

analizado las normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal en relación con la información objeto de tratamiento.

II

Tal y como se ha señalado, en el contexto de este real decreto, el proceso de etiquetado en sí no implica la identificación o el tratamiento directo de datos personales de las personas consumidoras. El etiquetado se centra en la presentación de información sobre los productos para garantizar la accesibilidad universal a personas con discapacidad y no requiere, por sí mismo, la recopilación de datos personales.

No obstante, la afectación en materia de protección de datos sobre las personas consumidoras vulnerables, en particular aquellas con discapacidad, podría tener lugar antes o después de la aplicación del etiquetado accesible, especialmente cuando se utilizan o actualizan datos personales que ya obran en bases de datos de las empresas fabricantes, distribuidoras, o de otras entidades. En este sentido, la recogida, almacenamiento o consulta de datos de carácter personal en sistemas de atención al cliente, aplicaciones móviles u otros canales tecnológicos que interactúen con el etiquetado accesible podrían generar tratamientos de datos personales con anterioridad a la implementación del etiquetado o bien como resultado de su uso posterior.

Además, aunque el proceso de etiquetado accesible en sí mismo no suele implicar un tratamiento directo de datos personales, podrían darse situaciones donde la información de personas vulnerables, en particular aquellas con discapacidad, sea manejada para personalizar, adaptar o hacer accesible la información en el etiquetado.

No obstante, como se ha indicado, la existencia de tratamientos de datos de carácter personal no se contempla en la norma sometida a informe, ni tampoco en su MAIN, por lo que las consideraciones y sugerencias que, a continuación, se refieren, tendrán cabida únicamente en el supuesto de que dichos tratamientos se produzcan de la manera que se pasa a exponer.

Así, en cuanto a etiquetado accesible, el artículo 2 del proyecto establece la necesidad de que los productos incluyan información en sistemas accesibles como braille, códigos QR, o elementos tecnológicos.

Pues bien, en cuanto a protección de datos, los códigos QR u otros sistemas tecnológicos pueden implicar la recogida o tratamiento de datos personales, especialmente si se vinculan a bases de datos que contienen información sobre la discapacidad de la persona.

En consecuencia, de concurrir dicha recogida y tratamiento en el supuesto que se informa, se sugiere la adición de un precepto que indique que el uso de estos sistemas debe respetar la confidencialidad y protección de los datos de las personas usuarias, garantizándose que los códigos QR o sistemas análogos no recopilen datos personales sin el consentimiento explícito de la persona, conforme a los artículos 6 y 7 del RGPD.

Por otra parte, dado que el artículo 3 del proyecto de real decreto, prevé la inclusión de información relativa a la naturaleza, composición, y posibles alérgenos/intolerancias, es fundamental asegurar que se dé el debido cumplimiento a la regulación sobre datos de salud (art. 9 RGPD) que puedan derivarse de esta información, para el supuesto de que esta sea recabada, y que exigen un alto nivel de protección.

Para dicho supuesto, los responsables de los correspondientes tratamientos deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa de protección de datos, y, muy especialmente, considerar que las personas con discapacidad se encuentran en una posición de vulnerabilidad en cuanto a la protección de sus datos personales, especialmente los relativos a su salud.

De acuerdo con el RGPD, el tratamiento de datos personales de personas con discapacidad, y en particular aquellos datos que pueden ser considerados como "categorías especiales de datos" (art. 9 RGPD), requiere medidas adicionales de protección. Los datos relativos a la salud, la discapacidad o cualquier información que pueda identificar o hacer identificable la condición de discapacidad de una persona son considerados datos sensibles y están sujetos a un régimen de protección más estricto.

Así, el **artículo 9.1 RGPD** dispone que *"Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física."*, removiéndose dicha prohibición solo en los supuestos establecidos en el **apartado 2** de dicho artículo 9.

En su caso, una vez removida la interdicción anterior, para que el tratamiento de datos se repunte lícito y legítimo, este deberá responder a alguna de las bases de legitimación del artículo 6.1 –"Licitud del tratamiento"- RGPD,

En concreto, en el supuesto de que dichos tratamientos se llevaran a cabo por el órgano consultante, resultaría de aplicación la habilitación del artículo **6.1 e)** de dicho RGPD, al devenir dicho tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, y desarrollarse en el marco de las

competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1. 1.^a, 6.^a, 8.^a y 13.^a de la Constitución Española.

Asimismo, en los supuestos de tratamiento de datos personales asociados al proceso de etiquetado accesible, deberá cumplirse con los principios de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad, tal como se establecen en el **artículo 5 del RGPD**.

A su vez, en el supuesto de concurrir dicho tratamiento de manera eventual o sistemática, por parte del órgano consultante debería:

- Llevarse un “Registro de las actividades de tratamiento -RAT-” con el contenido señalado en el **artículo 30** del RGPD, que habría de ser preciso en la descripción de los fines del tratamiento, y de las categorías de interesados y de datos personales objeto de tratamiento,
- Y, atendiendo al principio de responsabilidad desde el diseño y por defecto previsto en el **artículo 25** del RGPD, deberían adoptarse, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, y, en concreto, la seudonimización. Además, debería garantizarse que, por defecto, solo fueran objeto de tratamiento los datos personales que resultaran necesarios para los fines específicos del tratamiento.

En todo caso debería cumplirse con (i) el deber de información previsto en los artículos **13 y 14 RGPD**, que habría de concretarse de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, mediando la utilización de un lenguaje claro y sencillo de acuerdo con el artículo **12 RGPD**, y (ii) debería facilitarse, de un modo sencillo y gratuito, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición, conforme a lo previsto en el artículo 12 del RGPD.

Finalmente, en el artículo 5 del texto propuesto -Asesoramiento y colaboración en materia de etiquetado accesible-, se mencionan posibles colaboraciones con asociaciones y entidades de personas consumidoras y usuarias. Es importante señalar que cualquier intercambio o tratamiento de datos personales en el marco de estas colaboraciones debe cumplir estrictamente con la normativa de protección de datos y que la transmisión de datos deberá realizarse de manera segura, respetando los principios de minimización y confidencialidad (art. 5 del RGPD), y teniendo su amparo en alguna de las bases de legitimación del artículo 6.1 del RGPD.

En definitiva, **de concurrir** eventual o sistemáticamente el **tratamiento** de datos de carácter personal, **se sugiere** la incorporación de un nuevo artículo al

proyecto de real decreto, o bien de una disposición adicional, en la que se haga constar la existencia de los tratamientos de datos a los que se ha hecho mención en los párrafos anteriores, introduciendo un texto que podría ser del siguiente tenor:

“Las actuaciones en materia de etiquetado accesible de productos de consumo, en el caso de que se lleven a cabo tratamientos de datos personales, se realizarán con el debido respeto a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantizando el derecho fundamental de los afectados a la protección de sus datos de carácter personal”.